



Magistrado Ponente: Dr. Jorge Dussán Hitscherich

RESOLUCIÓN No. CSJHUR19-264
28 de agosto de 2019

“Por la cual se resuelve una solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa”

EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias conferidas en el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA11- 8716 de 2011 y según lo aprobado en sesión ordinaria del 15 de agosto de 2019, y

CONSIDERANDO

1. Antecedentes.

- 1.1. El abogado Richard Mauricio Gil Ruíz, solicitó vigilancia judicial administrativa al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, propuesto por Jenny Magnolia Moya Perdomo en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el cual cursa en el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Neiva, debido a que el despacho judicial tardó más de cinco meses para adelantar el trámite previsto en el numeral 1º del artículo 131 del CPACA.
- 1.2. En virtud al artículo 5 del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, con auto del 29 de julio de 2019, se dispuso requerir al doctor Jesús Orlando Parra, Juez 002 Administrativo del Circuito de Neiva, para que rindiera las explicaciones del caso.
- 1.3. El doctor Jesús Orlando Parra, dentro del término dio respuesta al requerimiento, señalando que:
 - 1.3.1. El proceso objeto de esta vigilancia se recibió en ese juzgado, con oficio No. 076 del 28 de enero de 2019, proveniente del Juzgado 001 Administrativo del Circuito de Neiva, sin embargo, en el acta de informe de gestión y del inventario de procesos entregados a él, rendido por la jueza saliente, no aparecía el citado proceso inventariado, como tampoco, radicado en ese despacho.
 - 1.3.2. Expuso que sólo hasta mediados de julio de 2019 tuvo conocimiento del proceso, por cuanto la demandante, quien labora en el Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Neiva, le manifestó que su proceso no aparecía.
 - 1.3.3. Indicó que, mediante oficio No. 1859 del 22 de julio de 2019, el proceso fue enviado al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.
 - 1.3.4. Agregó que, si bien el expediente se traspapeló, ese proceso al igual que todos los demás, promovidos contra la Rama Judicial por la bonificación, se encuentran en el mismo trámite, es decir, pendiente que el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila se pronuncie sobre los impedimentos.

2. Marco Jurídico de la Vigilancia Judicial.

Con fundamento en los hechos expuestos y las explicaciones dadas por el funcionario, corresponde a esta Corporación entrar a decidir si el servidor judicial ha incurrido en actuaciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de Justicia, a la luz del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, para lo cual es pertinente señalar lo siguiente:

- 2.1. La Vigilancia Judicial Administrativa fue establecida por la Ley 270 de 1996 y reglamentada por la Sala Administrativa del Consejo Superior mediante Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, normas que la definen como una herramienta que sirve para verificar que la justicia se administre oportuna y eficazmente, como también para procurar por el normal desempeño de las labores de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial¹.
- 2.2. En el mismo sentido, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Circular PSAC10-53 de 2010, señaló que la Vigilancia Judicial Administrativa es una acción de carácter eminentemente administrativo que busca que la administración de Justicia sea eficaz y oportuna bajo el respeto de la autonomía e independencia judicial (C.P., artículo 230 y Ley 270 de 1996, artículo 5).
- 2.3. Según lo dispuesto por el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, la Vigilancia Judicial Administrativa opera cuando un funcionario judicial incurre en prácticas dilatorias o mora judicial injustificada, que atente contra la eficaz y oportuna administración de justicia, situación ésta que conllevaría a la aplicación de una sanción de tipo administrativo.
- 2.4. La mora judicial es definida como "*la conducta dilatoria del Juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso judicial y tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable*"².
- 2.5. Es claro que el ámbito de aplicación de la vigilancia judicial administrativa apunta exclusivamente a que se adelante un control y verificación de términos en el desarrollo de las etapas procesales, en procura de una administración de justicia eficaz y oportuna, para advertir dilaciones injustificadas imputables, bien sea al funcionario o al empleado del despacho donde cursa el proceso.

3. Problema jurídico.

El problema jurídico consiste en determinar si el doctor Jesús Orlando Parra, Juez 002 Administrativo del Circuito de Neiva, ha incurrido en mora o retardo injustificado para adelantar el trámite previsto en el numeral 1º del artículo 131 del CPACA, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, propuesto por Jenny Magnolia Moya Perdomo en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

4. Precedente normativo y jurisprudencial: acceso a la administración de justicia y la mora judicial.

Los artículos 29 y 228 de la Carta Política y el artículo 4 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), imponen a los servidores judiciales, la obligación de atender los términos procesales. Por su parte, los numerales 1 y 8 del artículo 42 del Código General del Proceso, establecen que es deber del juez velar por la pronta solución del proceso, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización, procurar la mayor economía procesal y dictar las providencias dentro de los términos legales.

Sobre el alcance de estas disposiciones, la Corte Constitucional señaló:

“La jurisdicción no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan el litigio, atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos. Así las cosas, vale decir, que una decisión judicial tardía, constituye en sí misma

¹ Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, artículo 1º.

² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de abril de 2008. Consejero Ponente: Dr. Héctor J. Romero Díaz. Rad.: 11001-03-15-000-2008-00324-00

una injusticia, como quiera que los conflictos que se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse”³.

Asimismo, la Corte Constitucional ha expresado que a los funcionarios no les basta con aducir exceso de trabajo o una significativa acumulación de procesos para que el incumplimiento de los términos judiciales sea justificado, pues no se puede hacer recaer sobre la persona que acude a la jurisdicción la ineficiencia o ineficacia del Estado, desconociendo sus derechos fundamentales⁴.

De igual manera, es pertinente reiterar lo señalado por la jurisprudencia en cuanto que la justificación de la mora debe ser extraordinaria y no puede simplemente argumentarse la congestión de los asuntos al despacho, pues es necesario que *“el juez correspondiente ha obrado con diligencia y cumplido a cabalidad la totalidad de sus obligaciones constitucionales y legales, de modo tal que la demora en decidir sea para él el resultado de un estado de cosas singularizado y probado que se constituya en motivo insuperable de abstención”⁵* o, como se afirmó en la Sentencia T-1068 de 2004, *“no puede aducirse por parte de un juez de la República que se cumplen las funciones a él encargadas para un negocio y se desatienden en otro”⁶*.

Complementando esta posición, la misma Corporación señaló lo siguiente:

“Se está ante un caso de dilación injustificada o indebida, cuando quiera que se acredite que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. La dilación injustificada que configura la violación de derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar”⁷.

Vale la pena agregar que en la Sentencia T-292 de 1999, la Corte Constitucional llega a sostener que el análisis de cada situación debe hacerse en “un sentido exigente”, de manera que solo si se encuentra “probada y establecida fuera de toda duda” la justificación de la conducta, puede exonerarse al servidor judicial de su obligación de resolver oportuna y eficazmente los asuntos a su cargo. En efecto, la providencia comentada sostiene lo siguiente:

“Las situaciones, para que configuren justificación en cuanto a la mora del juez, deben ser examinadas en cada caso específico con el carácter extraordinario que les corresponde, tanto por el juez de tutela como por el disciplinario, con un sentido exigente y sin laxitud, con el fin de impedir que la extensión de las razones justificativas convierta en teórica la obligación judicial de resolver con prontitud y eficacia. Solamente una justificación debidamente probada y establecida fuera de toda duda permite exonerar al juez de su obligación constitucional de dictar oportunamente las providencias a su cargo, en especial cuando de la sentencia se trata. La justificación es extraordinaria y no puede provenir apenas del argumento relacionado con la congestión de los asuntos al despacho”.

Como complemento de lo anterior, la Corte Constitucional también ha precisado que es al funcionario a quien le corresponde demostrar que obró con diligencia, como se afirma en la siguiente providencia:

“[...] la mora judicial solo se justificaría al magistrado, juez o fiscal si a pesar de que éstos agotaron todas las medidas para evitar la congestión del despacho judicial, aun así la dilación

³ Sentencia T-577 de 1998.

⁴ Sentencia T-604 de 1995.

⁵ Sentencia T-292 de 1999.

⁶ Citada en la Sentencia T-030 de 2005.

⁷ Sentencia SU394 de 2016. Además, pueden consultarse las siguientes Sentencias: T-502 de 1997, T-292 de 1999, T-1226 de 2001, T-803 de 2012 y T-230 de 2013.

surge de forma imprevisible e ineludible. Debiéndose en todo caso informarse de esa situación a los administrados quienes tienen derecho a conocer con precisión y claridad las circunstancias por las que atraviesa el despacho judicial y que impiden una resolución pronta de los procesos. Lo contrario sería asumir como constitucionalmente válido que el administrado deba ser sometido a una espera indefinida en la resolución de su demanda de justicia, situación que repugna al Estado social de derecho dada la garantía material y no meramente formal de los derechos que en él se prohija.

La Sala precisa, entonces, que el hecho de que la dilación en el trámite judicial no sea imputable a conducta dolosa o gravemente culposa alguna del funcionario, sino al exceso de trabajo que pesa sobre los despachos judiciales, puede, en principio, exculpar a aquellos de su responsabilidad personal, pero no priva a los administrados del derecho a reaccionar frente a tales retrasos, ni permite considerarlos inexistentes. En otras palabras, dicha situación, no autoriza a considerar que la dilación es justificada, sin prueba alguna de que se haya intentado agotar todos los medios que las circunstancias permiten para evitarla. De esta manera el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial”⁸.

En este sentido, si se presenta mora judicial en un proceso, debe demostrarse que se presentaron circunstancias insuperables, no atribuibles al funcionario, como ocurre cuando se interponen recursos ante el superior, se presentan incidentes o en aquellos casos en que debe interrumpirse o suspenderse el trámite del proceso.

También es posible admitir un retardo normal en las decisiones que deben adoptarse cuando el funcionario demuestre que ha actuado de manera diligente, adelantando las actuaciones procesales en plazos razonables, atendiendo a la carga laboral de su despacho y a la complejidad del asunto que conoce.

5. Análisis del caso concreto.

La presente vigilancia judicial administrativa inició con el informe presentado por el abogado Richard Mauricio Gil Ruíz, indicando que el Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Neiva, tardó más de cinco meses para adelantar el trámite previsto en el numeral 1º del artículo 131 del CPACA, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, propuesto por Jenny Magnolia Moya Perdomo en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

5.1. Reseña procesal.

Para el caso objeto de esta vigilancia, es importante entrar a examinar las actuaciones desplegadas por el funcionario, las cuales se pueden observar, así:

Fecha	Actuación
28/01/2019	Con oficio No. 076 del 28/01/2019, se recibe expediente, proveniente del Juzgado 001 Administrativo del Circuito de Neiva.
19/07/2019	Memorial abogado Richard Mauricio Gil Ruíz, solicitando darle el trámite que correspondiera al proceso en cuestión.
22/07/2019	Auto resuelve declararse impedido para conocer del presente asunto.
22/07/2019	Se libra oficio No. 1859, remitiendo expediente al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.
23/07/2019	Acta de reparto, asignando el conocimiento del proceso al Magistrado Jorge Alirio Cortés Soto.

Revisadas las actuaciones, se tiene que la solicitud de vigilancia fue radicada el 25 de julio de 2019 y que el servidor judicial, mediante providencia del 22 julio de 2019, resolvió declararse impedido

⁸ Sentencia T-030 de 2005.

para conocer del asunto, ordenando remitir las diligencias al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.

En ese orden, es importante precisar que no se puede predicar la existencia de mora judicial respecto de actuaciones ya surtidas dentro del proceso, pues la mora consiste en el retardo injustificado de una actuación procesal específica, cuyo cumplimiento incumbe al servidor judicial, de manera que si las actuaciones a las que se refiere el abogado solicitante fueron decididas antes que se presentara la solicitud de vigilancia, es contradictorio considerar que el funcionario está en mora de resolver.

Pese a lo anterior, no puede desconocerse que hubo retraso en la respuesta judicial dada por el juez. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas recibidas, éste obedeció a que el funcionario judicial desconocía la existencia del proceso, toda vez, que dentro del inventario practicado entre la jueza saliente y el doctor Jesús Orlando Parra, el citado proceso no quedó registrado en el informe de procesos a cargo de ese despacho judicial, como consta en la copia del acta de informe de gestión junto con sus anexos, suscrita el 14 de febrero de 2019.

Por lo tanto, es necesario recordarle al juez que, como director del despacho, tiene el deber de llevar un control estricto de los procesos a su cargo, por lo que periódicamente debe revisar física y pormenorizadamente el inventario de procesos del juzgado, así como los ingresos diarios, tanto de las demandas, como de los memoriales, llevar un control de la agenda del despacho y de los términos para decidir, vigilar el cumplimiento de las funciones y tareas encomendadas a los empleados, así como supervisar los demás asuntos que son necesarios para la buena marcha del despachos, por lo que deberá exhortarse al funcionario para que implemente un control estricto de los asuntos a su cargo y con ello, la realización de un inventario pormenorizado de todos los expedientes, a fin de evitar a futuro la ocurrencia de situaciones similares, que atenten contra los principios de celeridad y eficiencia que rigen la administración de justicia.

Así la cosas, es de precisar que el objetivo de la vigilancia judicial apunta a que se adelante un control de términos, como también procurar por el normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, respetando la autonomía e independencia judicial de los operadores de la justicia, por lo que esta Corporación no encuentra mérito para abrir el mecanismo de la vigilancia judicial al doctor Jesús Orlando Parra.

6. Conclusión.

Analizadas en detalle las situaciones fácticas puestas de presente en los numerales anteriores, este Consejo Seccional no encuentra mérito para abrir el mecanismo de la vigilancia judicial administrativa en contra del doctor Jesús Orlando Parra, en su condición de Juez 002 Administrativo del Circuito de Neiva, por no reunirse los presupuestos señalados en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, para tal fin.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. ABSTENERSE de abrir el mecanismo de la vigilancia judicial administrativa en contra del doctor Jesús Orlando Parra, Juez 002 Administrativo del Circuito de Neiva, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2. EXHORTAR al funcionario judicial para que implemente un control estricto de los asuntos a su cargo y con ello, la realización de un inventario pormenorizado de todos los expedientes, a fin de evitar a futuro la ocurrencia de situaciones similares, que atenten contra los principios de celeridad y eficiencia que rigen la administración de justicia.

ARTÍCULO 3. NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al abogado Richard Mauricio Gil Ruíz en su condición de solicitante y al doctor Jesús Orlando Parra, Juez 002 Administrativo del Circuito de Neiva, como lo disponen los artículos 66 a 69 CPACA.

ARTÍCULO 4. Contra la presente decisión procede únicamente el recurso de reposición, por ser éste trámite de única instancia a la luz de la Ley 270 de 1996 y del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, el cual de conformidad al artículo 74 del CPACA deberá interponerse ante esta Corporación dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 ibídem.

ARTÍCULO 5. Una vez se adelante el trámite correspondiente y en firme el presente acto administrativo, las diligencias pasaran al archivo definitivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Neiva, Huila.



JORGE DUSSÁN HITSCHERICH
Presidente

JDH/DADP.